

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

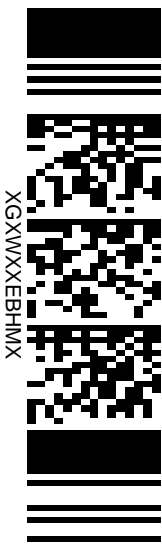
VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece don Alberto Fontena Araneda, abogado, en representación de Comercial Fernapet Limitada, representada legalmente por don Patrick Fernando Flores Muñoz, domiciliados para estos efectos, en calle Moneda N°973, oficina 1015, Santiago; deduce recurso de reclamación por ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N°7539 del 06 de julio de 2021, dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante SEC, que sancionó a la recurrente con una multa de 300 UTM, por la venta de artículos eléctricos sin la debida autorización.

Explica que, por medio de Oficio Ordinario N°21883, del 09 de diciembre de 2019, la Superintendencia formuló los siguientes cargos en contra de la recurrente:

a) Comercializar los productos indicados en el número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Tabla N°1 del Considerando 4°, sin contar con sus correspondientes Certificados de Aprobación -Certificado de Seguridad- vigentes que los amparen, otorgados por un Organismo de Certificación autorizado por esta Superintendencia, lo que constituye una transgresión a lo establecido en el artículo 27 letra a) del D.S. N°298 de 2005 del Ministerio de Economía y Reconstrucción, de acuerdo con el artículo 3 N°14 de la Ley N°18.410.

b) Comercial los productos eléctricos indicados en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la Tabla N°1 del Considerando 4°, sin contar con sus respectivos marcados de seguridad visibles al público (Sello QR), lo que constituye una infracción según lo indicado en el artículo 27, letra d) del D.S. N°298 de 2005 del Ministerio de Economía y



Reconstrucción, de acuerdo a lo instruido en la Resolución Exenta N°2.142, de fecha 31 de octubre de 2012, de la SEC, según lo prescrito en el artículo 11 del reglamento citado, todo en coherencia con el artículo 3 N°14 de la Ley N° 18.410.

c) No acatar las instrucciones dadas por la Superintendencia en el punto 8 del oficio Circular N°9.426 de fecha 21 de julio de 2016, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de octubre de 2016, en donde se instruye a los comerciantes el retiro del comercio de productos consignados en la Tabla N°1, del punto 3 del mencionado Oficio Circular donde se prohíbe transitoriamente la comercialización del producto “Lámpara Led con rosca con reflector giratorio interno” señalado en el número 1 de la Tabla del Considerando 4° de la resolución.

La formulación de cargos fue notificada el 07 de febrero de 2020, sin que la recurrente formulara descargos dentro de plazo. Posteriormente, el 06 de julio de 2021, la Superintendencia dictó la resolución recurrida sancionando a la empresa con el pago de 300 UTM.

En cuanto a los defectos de legalidad reclamados, señala que el procedimiento se encuentra viciado puesto que, si bien la autoridad señala que la formulación de cargos fue notificada el 07 de febrero de 2020, alega que este oficio no le fue notificado, impidiéndole realizar los descargos dentro de plazo y afectando el principio de debido proceso consagrado en el inciso quinto del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a las infracciones sancionadas, reclama que los productos cuya comercialización motivaron la sanción, fueron



adquiridos a la Importadora y Exportadora Hong Yuan Limitada. En sentido, señala que, de acuerdo con el artículo 3 N°14 de la Ley N° 18.410, los productos eléctricos no podrán comercializarse en el país sin contar con el o los respectivos certificados y con la respectiva etiqueta de consumo energético, de ser esta exigible, según con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Ley N° 2.224 de 1978. A su vez, el artículo 12 del Decreto Supremo N°298, señala que “Serán responsabilidades y obligaciones de los importadores y fabricantes nacionales, (...)” las allí indicadas.

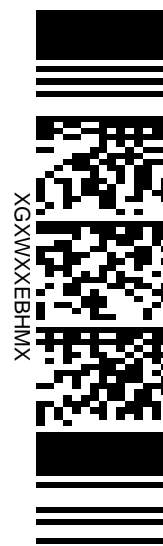
De acuerdo a esta disposición, afirma que los importadores son los responsables de certificar los productos antes de su comercialización en el país y, según el ítem C) V del mismo artículo, serían éstos quienes tienen la obligación de proveer a sus clientes conjuntamente con el producto el certificado de aprobación del mismo.

Agrega que, conforme al artículo 13 del Decreto Supremo N° 298 dentro de las obligaciones de los comercializadores están las siguientes: verificar que los productos que van a comercializar dispongan de lo previsto en la letra C) del artículo 12.

Argumenta que, puede deducirse del sentido de las normas expuestas, que la obligación de las comercializadoras no puede extenderse al nivel de detalle y precisión que resulta exigible para el fabricante o importador, sino que debe ser una verificación razonable.

Conforme a lo anterior, señala que su representada al adquirir los productos, consultó con la importadora respecto a la existencia de la certificación, agotando -a su juicio- su obligación.

En relación con la orden de retiro de uno de los productos, señala que existe un error en la identificación de este.



Por último respecto a la multa, indica que el monto fijado resulta desproporcionado tratándose de una empresa pequeña.

Concluye, solicitando que, se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 7539, del 06 de julio de 2021, en subsidio, solicita que se rebaje la multa de conformidad con los principios de justicia y equidad.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles señala que, la multa impuesta se enmarca en lo dispuesto por el artículo 3° N° 14, inciso 2° de la Ley N° 18.410, que prescribe que para comercializar un producto sometido al sistema de certificación debe contarse previamente con el debido certificado de aprobación. Luego, el Decreto Supremo N°298 del año 2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, prescribe en su artículo sexto que los productos con obligatoriedad de certificación, ésta debe ser previa a su comercialización en el país, por alguno de los sistemas de certificación para efectos de evaluar su conformidad con los protocolos aplicables, siendo, entonces, obligación de todo comercializador, certificar previamente los productos que comercializa, según el artículo 27, letra a), del Decreto en comento, artículo que sin perjuicio de otras conductas sancionables, enumera hechos ilícitos típicos realizados por fabricantes, importadores o comercializadores, como la falta de certificación

En cuanto a los vicios reclamados, sobre la supuesta falta de notificación de la formulación cargos, señala que este acto fue efectivamente notificado, según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley



N° 18.410, por medio de carta certificada, cuyo número de verificación en la empresa Correos de Chile es el N° 1176201368085.

Agrega que, el recurrente no acompañó ningún antecedente que pudiera desvirtuar dicha notificación.

En relación con las infracciones y la limitación de responsabilidad alegada por la empresa, refiere que tanto el artículo 3° N° 14 de la Ley N° 18.410 como el artículo 27, letra a), del Reglamento, determina la existencia de una prohibición de comercializar productos no certificados, a los comercializadores, sin realizar distinción alguna que permita limitar al sujeto obligado, a un actor de la cadena de distribución de productos peligrosos.

De esta manera, si bien el diseño regulatorio genera los incentivos para que sean los fabricantes o importadores los solicitantes de certificación a los organismos autorizados, como lo advierte la reclamante, todos los actores de la cadena de distribución de productos peligrosos se encuentran con la prohibición de comercializar artefactos no certificados.

En cuanto al error de hecho que se habría verificado en la fiscalización al constatar el producto comercializado, atendidos sus cambios comerciales de marca y modelo, en el caso se tuvo como definición del producto, el diseño, concretamente, lámpara LED con rosca Edison con reflector giratorio interno, siendo el mismo al constatado en la fiscalización, lámpara Led con disco giratoria, de acuerdo al artículo 3° D de la Ley N° 18.410, donde se otorga la calidad de ministro de fe a los fiscalizadores de esta Institución. En consecuencia, no se observa un error de hecho, como lo plantea sin



mayor argumento y medio probatorio la reclamante, para controvertir los que se presume veraz de acuerdo con el artículo 3ºD citado.

Por último, sobre el quantum de la multa, refiere que, justamente la calidad de proveedor final, naturalmente, comercializador al detalle, ha llevado a ponderar la sanción con una multa equivalente a 300 UTM, en el rango de 1 UTM a 6000 UTM que habilita el artículo 16 A de la Ley N° 18.410, siendo irrelevante por lo demás la capacidad económica del sancionado, lo que tampoco acreditó mediante el balance respectivo.

TERCERO: Que, en la especie, se ha reclamado la ilegalidad de la Resolución Exenta N° 7359 de fecha 6 de julio del año 2021, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, mediante la cual se ha sancionado a la reclamante con una multa de 300 UTM, por la venta de artículos eléctricos sin la debida autorización.

CUARTO: Que la sanción administrativa se ha aplicado por parte del SEC, de acuerdo con las facultades que le permite el ordenamiento jurídico a la Administración del Estado, las que se conocen en doctrina como “*Actividades de Policía*”, son aquellas que limitan los derechos de las particulares por razones de interés general y con el objeto de alcanzar la mantención del orden público. Esta actividad es ejercida principalmente por las Superintendencias, encontrándose entre ellas, la Superintendencia recurrida, como se acreditará a continuación.

QUINTO: Que, en efecto, la acción para reclamar de ilegalidad se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, que crea la SEC, a cuya interposición le antecede una etapa

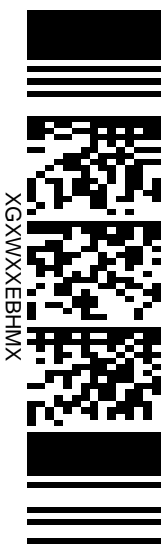


previa administrativa, siendo legitimados activos para interponer en esta sede jurisdiccional *“Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que les corresponda aplicar”*.

SEXTO: Que, en tal sentido, el artículo 2 del citado texto legal, dispone como objeto de la creación del ente administrativo SEC, la facultad de: *“Fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyen peligro para las personas o cosas”*; función que le otorga, por cierto, la potestad para sancionar el incumplimiento de la normativa. Así el artículo 3 en su numeral 23, dentro de las facultades específicas señala: *“Sancionar el incumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias vigentes...con, multas.....”*.

SEPTIMO: Que, los fundamentos de la reclamación constan de alegaciones de forma y de fondo: en cuanto al primero, alega la falta de notificación del Oficio en que se formularon los cargos que le impidieron hacer valer sus alegaciones y defensas; en cuanto al fondo, alega la inexistencia de la obligación, pues en su parecer, no le correspondía obtener la certificación, sino que, era obligación de quien le vendió los productos para comercializarlos.

OCTAVO: Que, en cuanto a la existencia de un vicio de carácter formal, lo cierto es que, el reclamante no acompañó



antecedentes que permitan acreditar que, efectivamente, no se le notificó el Oficio Ordinario N° 21.883 de 9 de diciembre del año 2019; en el que se le formularon los cargos; y ajustándose tal notificación a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.410, esta alegación no cabe sino desecharse.

NOVENO: Que en cuanto al fondo, debe dilucidarse si, el reclamante en su carácter de comercializador de productos eléctricos, tenía o no la obligación de obtener, en forma previa la certificación que exige la normativa legal y reglamentaria, esto es, el Sello de Seguridad y Etiqueta de Eficiencia Energética.

DECIMO: Que para lo anterior, es necesario traer a colación la siguiente normativa:

1.- Artículo 3 N° 14 de la Ley N° 18.410 de 1985: “Los productos eléctricos no podrán comercializarse en el país, sin contar con el o los respectivos certificados y con la respectiva etiqueta de consumo energético, de ser esta exigible, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4° del Decreto Ley N° 2.224 de 1978.

2.- El Artículo 12 del Decreto Supremo N°298 de 2005 del Ministerio de Economía y Fomento y Reconstrucción, señala que: *“Serán responsabilidades y obligaciones de los importadores y fabricantes nacionales, las siguientes:*

a) Certificar los productos antes de su comercialización en el país, a través de un Organismo de Certificación autorizado por la Superintendencia, de conformidad con alguno de los Sistemas de Certificación indicados en el artículo 5° del presente reglamento, según corresponda, salvo tratándose de los casos a que se refiere el artículo 9° de este Reglamento.



c) Proveer a sus clientes y usuarios en general, conjuntamente con el producto, de acuerdo a las disposiciones vigentes y en idioma español, la siguiente información: I.- Instrucciones de instalación. II.- Instrucciones de mantenimiento. III.- Instrucciones de uso seguro. IV.- Etiqueta. V.- Certificado de aprobación del producto. ”

3.- El Artículo 13, indica que: son obligaciones de los comercializadores, entre otras:

“a) Verificar que los productos que van a comercializar dispongan de lo previsto en la letra c) del artículo precedente. ”

4.- El Artículo 27, dispone que: *“Tratándose de fabricantes nacionales, importadores y comercializadores de productos eléctricos y de combustibles y sin perjuicio de lo que se establezca en otras disposiciones, se consideran sujetas a sanción las siguientes conductas:*

a) Comercializar productos sin su respectivo Certificado de Aprobación.

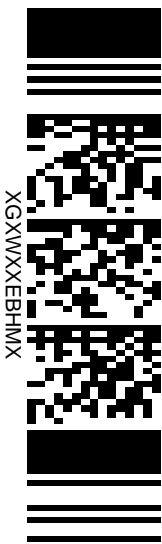
b) Comercializar un producto con un Certificado de Aprobación que no corresponda al producto.

c) Adulterar o falsificar un Certificado de Aprobación.

d) Comercializar un producto sin su respectivo marcado, etiquetado o advertencia de seguridad, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias y técnicas vigentes.

e) Comercializar un producto sin su respectivo Manual de Instrucciones escrito en idioma español, para todos aquellos productos que por su uso y características así lo requieran, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias y técnicas vigentes.

f) Adulterar o falsificar el marcado, etiquetado o advertencia de seguridad del Organismo de Certificación. ”



UNDECIMO: Que la reclamante no ha desconocido que es la comercializadora de los productos que se ofrecían a través de su página web; y de la normativa que se ha particularizado en el motivo que antecede, aparece nítidamente que, no podía comercializar los productos eléctricos sin que previamente obtuviera la certificación de éstos; incumpliendo de este modo la normativa que así se lo imponía; de manera tal que, los hechos por los cuales se formularon los cargos y, en definitiva, se sancionó, se encuentran plenamente acreditados.

DUODECIMO: Que, por lo antes razonado, se concluye que, encontrándose ajustada a la legalidad la sanción impuesta; debe emitirse pronunciamiento entonces sobre la petición subsidiaria de rebaja de la multa; la que tampoco podrá prosperar, por cuanto la misma se ha ajustado a los parámetros contemplados en el artículo 16 de la Ley N° 18.410, esto es, para el quantum, se ha considerado, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado; porcentajes de usuarios afectados; el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; intencionalidad en la comisión de la infracción y grado de participación; conducta anterior y, por último, la capacidad económica; y que, respecto de esta última, no acompañó antecedentes al efecto.

DECIMO TERCERO: Que todo lo anterior lleva, en forma indefectible, a desechar el reclamo en análisis:

Por lo expuesto, citas legales y lo dispuesto en la Ley N° 18.410, **SE RECHAZA**, sin costas, la reclamación deducida por COMERCIAL FERNAPET LIMITADA en contra de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES.



Redacción de la ministra señora Marisol Andrea
Rojas Moya.

Regístrese y comuníquese y en su oportunidad,
archívese.

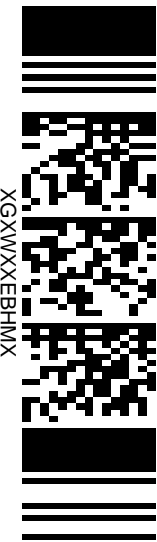
Rol N°237-2022

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por las ministras señora Inelie Durán Madina y señora María Paula Merino Verdugo.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M., Inelie Duran M., Maria Paula Merino V. Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>